

IGOR AMPUERO*
JAMES J. BRITAIN**

LA CUESTIÓN AGRARIA Y LA LUCHA ARMADA EN COLOMBIA

COLOMBIA ES UN PAÍS CON CRISIS ECONÓMICAS periódicas y conflictos sociales y políticos persistentes¹. Durante más de medio siglo, esta situación ha atravesado la Guerra Fría, la Alianza para el Progreso dirigida por los Estados Unidos en los primeros años de la década del sesenta, hasta el período presente marcado por el neoliberalismo y el Plan Colombia. Se ha vuelto claramente evidente, a través de todo este tiempo, que el Estado colombiano se ha mantenido parcial y localizado en su funcionamiento,

* Igor Ampuero es candidato a doctor en sociología y vive en Canadá. Nacido en Bolivia, es un estudiante del desarrollo latinoamericano, con especial interés en Colombia. Ha examinado el desarrollo socio-económico de Colombia durante dos décadas, y es una de las principales figuras en Canadá sobre temas de la situación política contemporánea del país. Actualmente investiga sobre las relaciones de los paramilitares colombianos con la producción y tráfico de narcóticos.

** James J. Brittain es candidato a doctor y catedrático en sociología en la Universidad de New Brunswick, Canadá. Su investigación está centrada en el análisis de la dinámica social y política de las FARC-EP en Colombia, y en el resurgimiento de los movimientos revolucionarios/sociales en América Latina. También investiga la relevancia contemporánea de la teoría marxista y sus aplicaciones prácticas en el hemisferio occidental.

1 Queremos expresar nuestro agradecimiento a Carly Manion por la asistencia en la investigación.

incapaz de promover el desarrollo sostenible y equitativo y de garantizar los derechos humanos de su población. Este fracaso, a su vez, ha empeorado más profundamente un conflicto interno y la “guerra sucia”, retrayendo los sectores de la población que han cargado el peso del subdesarrollo. La reciente ofensiva neoliberal y la proliferación del negocio de la droga han complicado y agravado un problema preexistente.

A pesar de estas debilidades y fracasos, el Estado colombiano no debe ser visto como un “Estado fracasado”. Ha triunfado en imponer los imperativos del capital internacional a través de su vicario local, la oligarquía nacional, que continúa dominándolo. Como tal, el Estado colombiano ha de ser visto como un instrumento poderoso del imperialismo. Esto ha sido reafirmado desde la década del ochenta por la imposición del modelo neoliberal de desarrollo en Colombia. En nombre de mejoras competitivas de mercado y eficiencia, el Estado se ha despojado de áreas estratégicas de producción, privatizando industrias básicas como el petróleo, la energía, la minería y la comunicación, mientras que, al mismo tiempo, ha abandonado sus obligaciones en áreas como educación y salud. Más que nunca, las ganancias fueron privatizadas y las pérdidas socializadas.

La fase actual de violencia interna en Colombia está íntimamente relacionada con el proceso de expansión económica inducido por la liberalización de la economía nacional. Los esfuerzos extremos del Estado colombiano para atraer y asegurar las inversiones extranjeras han fijado las condiciones estructurales de exclusión social, política y económica de la mayoría. Esta exclusión demanda que focalicemos nuestro análisis en la cuestión agraria y en el marco más amplio de la lucha rural de base para su inclusión en los procesos de desarrollo nacional.

LA ECONOMÍA POLÍTICA DE COLOMBIA

Colombia tiene una larga historia de conflictos sociales y políticos, que culminan en *La Violencia* (1948-1958). Este período dejó más de 200 mil muertes y un número aun mayor de desposeídos de sus tierras y sustentos tradicionales en la producción agrícola para beneficiar a grandes propietarios (Petras y Zeitlin, 1968; Wickham-Crowley, 1991; Chaliand, 1977). Lo que surgió al “final” de *La Violencia* fue una fórmula nacional de exclusión política bajo la forma del Acuerdo del Frente Nacional (1958-1974). El Frente Nacional, con el objetivo de mantener el control político y económico sobre la mayoría de la población colombiana, estableció un “acuerdo de poder compartido”, mediante el que los partidos Liberal y Conservador alternaban un período de “cuatro años de presidencia y dividían todas los puestos gubernamentales entre ellos”(Leech, 2002: 13). A través de este arreglo político:

El Estado, bajo el Frente Nacional, inhibió cualquier expresión de conflictos sociales y excluyó a las clases subordinadas de la política [...] el Frente Nacional eliminó esta posibilidad limitando la sucesión del gobierno y con la alternancia sólo a través de miembros elegidos a dedo, convirtiéndose así en una institución con la que la clase dominante negoció y resolvió las diferencias (Richani, 2002: 25).

En este momento, Colombia es una república con presidentes electos por un período de cuatro años sin posibilidad de reelección, ya que así lo estipula la Constitución de 1991. Esta estructura política todavía continúa acompañada por opresión extrema y violencia, que dieron como resultado el desplazamiento de más de 2 millones de colombianos a manos del Estado/fuerzas paramilitares (Petras y Veltmeyer, 2003). La monopolización de la vida política por los partidos Liberal y Conservador, junto con las implicaciones destructivas del desplazamiento en términos de desarrollo socio-económico, sigue siendo una barrera clave para negociar una solución política a la violencia que continúa plagando al país. Es en esta omisión hegemónica e indirecta que muchos, dentro de las fronteras de Colombia, están negados en los procesos políticos y sus voces, mientras gritan, permanecen silenciadas.

Colombia es un país con 41 millones de habitantes. Históricamente, la agricultura empleaba a la gran mayoría de colombianos, aunque durante el período de posguerra hubo un movimiento continuo de personas que iban desde las áreas rurales a las urbanas (Chasteen, 2001). En este proceso de migración, muchos centros urbanos se han desarrollado en el país: Bogotá, con una población de 7 millones; Medellín, con 2,1 millones; Cali, con 1,9 millones; y Barranquilla, con 1,2 millones. Grandes porciones de población son forzadas a abandonar las sociedades rurales hacia la metrópolis en la búsqueda de seguridad, empleo e ingresos. La vida urbana está altamente polarizada, y sólo una pequeña porción de la población puede considerarse "clase alta". Esto se debe al hecho de que muchas personas han migrado de las áreas rurales por necesidades económicas sólo para ser recibidas con iguales y nefastas perspectivas de empleos en las ciudades. Por ejemplo, en Bogotá, la capital y la ciudad más rica del país, más de la mitad de la población vive en la pobreza (Caballero, 2004).

Los campesinos han sido vistos como disuasivos del progreso. Por ende, como Ellen Meiksins Wood ha argumentado, ha habido "presión en aumento para concentrar las tierras en manos de los propietarios y granjeros más exitosos, quienes tendrían el capital y la flexibilidad de hacer el uso más rentable de las tierras. Con esa presión, los cercamientos de tierras comunes y campos abiertos por acuerdo comunal o por intercambio entre pequeños propietarios dieron lugar a un proceso más coercitivo

de desaparición de derechos consuetudinarios, llevaron a pequeños productores a apartarse de las tierras y excluyeron a la comunidad de las regulaciones y producción (2003: 76-77).

Esta noción de desarrollo económico ha sido apoyada dentro de Colombia durante décadas por teorías como la del “desarrollo acelerado”, de Lauchlin Currie (1966). Sólo en 2002, más de 412 mil personas fueron desplazadas dentro de Colombia (LAWG, 2003). La gran mayoría vive en regiones rurales del país, y son fundamentalmente campesinos. Durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, muchos campesinos han intentado obtener ingresos a través de la venta de su trabajo dentro de regiones rurales, pero han sido víctimas de los “programas de desarrollo acelerado” o de la violencia directa, que los obligaron a dejar sus tierras y estructuras de cooperación y propiedad. Históricamente, este modelo de acumulación primitiva y desplazamiento fue conducido por agentes contratados por los grandes propietarios y/o por militares domésticos, mientras hoy se encuentra en manos de grupos de derecha estatal/paramilitar (Leech, 1999). En tanto gran parte de la población colombiana actual rodea las áreas urbanas, la mayoría de los colombianos vivía y trabajaba en regiones rurales antes del desplazamiento iniciado durante la década del ochenta. Estudios realizados durante las décadas del sesenta y setenta mostraron que el 50% de la actividad económica del país y de la producción estaba basado en lo rural (Weil et al., 1970; Gilbert, 1974).

Aun a fines de la década del ochenta y del noventa, la agricultura continuó siendo el sector económico principal, a pesar del declive respecto de décadas anteriores; en 2000, la agricultura representaba el 19% de PBI y proveyó empleos al 30% de los trabajadores (EIU, 2003), incluyendo trabajos agrícolas y producción de cultivos campesina. Hoy, dentro de las regiones centrales del país, muchos campesinos trabajan con un método cooperativo para proveer bienes de subsistencia interna y para la construcción de un frente unificado contra los agentes represivos (Brittain, 2004). Muchos campesinos de estas regiones rurales mantienen un sistema que es bastante parecido al descrito por Marx, mediante el que “producen casi todas sus necesidades en sus propios terrenos, con la ayuda de sus familias, y obtienen sólo una pequeña fracción de los artículos que necesitan de afuera en intercambio por su propio excedente de producción”; establecen, así, el hecho de que “la familia o grupo de familias son básicamente autosuficientes” (1991: 1034). Esto no es decir que los campesinos no dependen o no están involucrados en el mercado, pero sí que algunos se apoyan mutuamente y en contra de las compulsiones del mercado.

El café ha sido históricamente, en palabras de Timothy Wickham-Crowley, un “cultivo crítico” para la existencia de Colombia (1992: 125).

Ha sido una de las exportaciones más importantes de cultivos agrícolas, representando en muchas ocasiones más de la mitad del total de ingresos por exportaciones. Sin embargo, con la liberalización del mercado y la caída de los precios del mercado mundial, se ha producido un fuerte descenso en las exportaciones de café, y llegó a alcanzar sólo un 8,2% del total de las exportaciones. Esto ha precipitado fuertes trastornos socio-económicos en las zonas rurales, ya que los dueños de las plantaciones y los trabajadores rurales han buscado reemplazar el café por un cultivo más viable y lucrativo (Agriculture and Agri-Food Canada, 2002; Mondragón, 2001). Los productos agrícolas, aparte del café, han experimentado también dificultades debido a la caída de precios de producción y al aumento de los costos del mercado (Richani, 2002), al punto de hacer insostenible la producción campesina. Dos de sus consecuencias han sido la migración a zonas urbanas y el aumento del resentimiento hacia el Estado, específicamente por la implementación de reformas neoliberales en contra de la provisión de seguridad y soberanía social y económica.

Un desplazamiento importante en la economía de Colombia ha sido el cambio de la agricultura a la extracción de recursos naturales. Las reservas de petróleo han aumentado enormemente durante las dos últimas décadas. Los sectores de recursos naturales del país se establecieron como la columna vertebral de las exportaciones económicas y son actualmente una fuente importante de divisas, ganancias y empleo doméstico: en 2000, el petróleo y el carbón alcanzaron un 41,5% del total de las exportaciones (Agriculture and Agri-Food Canada, 2002). A lo largo de los quince años pasados, a partir de la iniciativa Andina puesta en marcha por los Estados Unidos en 1989, la producción de petróleo colombiano ha aumentado casi el 80%. La mayoría de las exportaciones ha ido hacia los Estados Unidos, haciendo de Colombia el octavo suministrador extranjero más grande de petróleo crudo de ese país (Scott, 2003). El aumento de la producción petrolera ha sido apoyado económica y militarmente por las tres pasadas administraciones políticas de los Estados Unidos.

En el período 1970-1995, Colombia tuvo los índices más bajos de volatilidad macroeconómica y el índice que indica el segundo crecimiento más alto de América Latina (EIU, 2003). La crisis económica en América Latina durante la década del ochenta, conocida como la “década perdida”, no pareció tener grandes efectos en Colombia (Chasteen, 2001). La liberalización económica comenzó en Colombia a principios de la década del noventa, bajo la dirección de Instituciones Financieras Internacionales (IFI), en un esfuerzo por estimular el crecimiento económico. Las IFI expresaron la necesidad del gobierno colombiano de liberalizar la economía, implementado reformas sociales y económicas, reduciendo impuestos de importación, desregularizando las finanzas y aplicando

índices de intercambio extranjero para un mercado mas “amigable”. Últimamente, las telecomunicaciones, la energía, el turismo, los servicios financieros y los sectores de contabilidad y auditoría han estado o se están convirtiendo en las áreas principales de la liberalización. Entre 1998 y 1999, la economía colombiana entró en un período de receso, atribuido principalmente a los impactos externos, seguido de los esfuerzos de ajustes monetarios que apuntan a detener el índice de inflación que había sido incentivado por la devaluación de la moneda y el deterioro general de las finanzas públicas (EIU, 2003). Sin embargo, a principios de 2000, la economía colombiana comenzó a mostrar signos de recupero, asistida en gran medida por las exportaciones y, en particular, por el aumento del sector del petróleo, que es el destino principal de las inversiones extranjeras directas.

La liberalización y el crecimiento del sector del petróleo han estado acompañados por el apoyo económico, político y militar de los Estados Unidos, dentro de la estructura del “Plan Colombia”, iniciado por la administración de Clinton a fines de la década del noventa. El Plan Colombia fue un paquete de 1.300 millones que intentaba, en palabras del embajador estadounidense en Bogotá (2000):

Satisfacer las necesidades que las otras fuentes no pueden. Está basado en la esperanza compartida de lograr la paz y prosperidad en Colombia, a través de la reducción general de la producción de drogas ilícitas y su tráfico, y en permitir que el gobierno de Colombia establezca un control democrático y provea servicios e infraestructura a todo su territorio.

De hecho, el Plan Colombia ha sido el heredero del legado de Kennedy, la “Alianza para el Progreso”, combinando ayuda económica y militar dentro de una geoestrategia altamente militarizada de acumulación y control. En su presente reencarnación, esta estrategia imperialista ha desplegado el lenguaje de una “guerra contra las drogas y el terror”.

El principal socio comercial de Colombia siguen siendo los Estados Unidos. En 1999, las exportaciones de Colombia a ese país sumaron un 48% del total de las exportaciones, y las importaciones desde los Estados Unidos alcanzaron el 42,5% del total. Esta fuerte relación económica ha sido reforzada por el aumento de producción de petróleo en Colombia, cuyo 80% es directamente enviado a los Estados Unidos, y por un clima cada vez más favorable que atrae al FDI (Inversión Extranjera Directa) (Scott, 2003). Solamente los Estados Unidos dan cuenta de alrededor de un cuarto del total de FDI de Colombia, y la gran mayoría está siendo canalizada al creciente sector del petróleo. Otros importantes socios económicos son la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones (Banco de la República Colombia, 2003a, 2003b).

LA ECONOMÍA POLÍTICA AGRARIA

Mientras el sector agrícola colombiano ha jugado históricamente un papel clave en el desarrollo económico del país, también ha sido fuente de una extensa desintegración social, debido a las desigualdades estructurales que caracterizan su funcionamiento. El resultado ha sido la persistencia del conflicto sobre la propiedad de tierras y el acceso a los derechos entre los habitantes rurales durante casi ocho décadas. El Estado ha sido, y continúa siendo, un agente clave en el mantenimiento de la desigualdad estructural, específicamente al proteger y asegurar los intereses económicos de grandes propietarios y de negocios extranjeros, e impulsando la exclusión de trabajadores rurales y pequeños propietarios en todo el país.

Fue luego de *La Violencia* que el Estado se dio cuenta de que la oposición en aumento comenzaba a surgir en todas las regiones rurales del país con el potencial para desestabilizar el sistema político posterior a *La Violencia*. La reforma agraria fue uno de los medios para acabar con la oposición. Como observó David Bushnell:

La Violencia había revelado ampliamente la patología de gran parte de la vida rural en Colombia, que abarcaba los conflictos sobre las tierras en ciertas áreas rurales y el estado general de privaciones y falta de educación de las masas rurales, haciéndolas vulnerables a la manipulación política asesina. Por ende, la reforma agraria pareció ofrecer los medios para reparar algunos de los daños y crear una clase campesina fuerte, próspera, que resistiría los llamados futuros de locura partisana (1993: 232).

Así, en 1961, el Estado decidió promulgar la ley 135 (Ley de la Reforma Agraria Social) acompañada por la formación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). INCORA fue un cuerpo políticamente organizado y formado que autorizaba “la expropiación inmediata de haciendas privadas, si fuere necesario, para la redistribución entre aquellos que tienen insuficiente tierra o no la tienen” (Bushnell, 1993: 232). Sin embargo, el Estado se mostró en gran medida poco efectivo en la implementación de los cambios socialmente beneficiosos del programa de reforma agraria (Lindqvist, 1979). Así, “hacia 1971, fue distribuido menos del 1% de las tierras sujetas a expropiación, y la mayoría de las tierras eran públicas”; es más, “el fracaso institucional exacerbaba los conflictos por las tierras”, ya que el Estado y la ley 135 “no proveían un mecanismo eficiente de redistribución de tierras”, e “INCORA [no era capaz] de arreglárselas con las demandas cada vez mayores de tierras” (Richani, 2002: 28–31). Es de este fracaso que surgieron los movimientos de campesinos organizados (FARC-EP, 1999; Molano, 2000).

Como resultado de estos simbólicos programas de reforma, junto con los efectos del desplazamiento, la situación agraria y de las tierras es hoy

vastamente desigual. En un país donde 14 millones de hectáreas de tierra son consideradas adecuadas para la agricultura (comprenden cerca del 13% del área total del país), el 45% de esta tierra productiva está apropiada por un 0,3% de la población, con otro 20% de la tierra apropiada por el 2% de la población. Esto deja como resultado que el restante 97% de la población colombiana tenga acceso al 35% de las tierras agrícolas (Cortez, 2002). Son estadísticas recientes y parecen no reflejar los logros de la lucha de medio siglo por, entre otras cosas, la reforma agraria en Colombia.

No obstante, una cantidad importante de la población se mantiene con la producción agrícola, para el mercado y/o la subsistencia. Mientras los desplazamientos y las reformas neoliberales han debilitado los productos tradicionales como la yuca, el café y el maíz (Clawson y Lee III, 1998; Richani, 2002), muchos campesinos y pequeños propietarios han tomado también el cultivo de coca para mantener cierto nivel de subsistencia. La producción agrícola ilícita se ha desarrollado en muchas regiones de Colombia durante las pasadas tres décadas, pero desde la década del noventa, la producción de la planta de coca de los pequeños propietarios ha proliferado. Algunos de estos cultivadores, que son muy pobres y campesinos que viven principalmente gracias a la agricultura de subsistencia, establecen un pequeño terreno para cultivar coca junto con sus cultivos familiares (yuca, limón, maíz) y luego de un año podrán hacer más de lo que habrían podido lograr con un cultivo alternativo en el mercado legal. Una parte de estos agricultores vive en regiones donde operan las FARC-EP, y allí, la insurgencia es capaz de proteger a los pequeños propietarios y campesinos de las fuerzas paramilitares que se financian a través de la producción, procesado y tráfico de cocaína, heroína y marihuana (Richani 2002; Scott, 2003). Sin embargo, esto no es lo que informan comúnmente las fuentes periodísticas, que afirman que las FARC-EP están involucradas en la producción de drogas (de aquí los términos de “narco-guerrilla” o “narco-terrorismo”). Por el contrario, las FARC-EP, en toda su extensión geográfica, sólo se involucran en el 2,5% de la producción de droga campesina (Scott, 2003). Esta participación no se produce en el tráfico o contrabando, sino en las medidas para asegurar el pago justo al campesinado y evitar que se lo prive de los ingresos por los compradores de hojas. En este proceso de equidad y protección, las FARC-EP reciben un impuesto de las ganancias de los campesinos (aunque los campesinos más pobres están exentos de pagar el impuesto) en forma de dinero, animales o fruta (Richani, 2002; Clawson y Lee III, 1998; Galvis, 2000).

Las relaciones de género en la economía política rural de Colombia son otro aspecto importante de análisis. En Colombia, como en otros lugares, las mujeres son principalmente responsables de la reproducción del hogar. Esta responsabilidad tiene muchas dimensiones, que han sido previamente exploradas y desarrolladas en la literatura feminista y

desarrollista (Pearson, 1992; Sachs, 1996; Parpart, 2000). En Colombia, el *machismo*, en particular la marginalización de las mujeres en el acceso a los recursos de producción y reproducción, ha sido sistemáticamente reforzado por políticas de Estado y la liberalización económica. Las mujeres superan en Colombia el 30% de los jefes de hogar y componen el sector más pobre de campesinos y trabajadores. A pesar de ello, bajo la suposición de que el jefe de hogar es típicamente hombre, el Estado les ha negado sistemáticamente el título de tierras y el acceso a créditos. Es más, el proceso combinado de liberalización y conflicto armado ha aumentado enormemente la carga de reproducción social y, consecuentemente, el trabajo no asalariado de la mujer. Específicamente, la liberalización ha socavado los ingresos de los pequeños propietarios, empleos y salarios no relacionados con la agricultura, mientras el conflicto armado ha implicado la pérdida del sustento de forma directa por el desplazamiento forzado de miles de familias, particularmente en las regiones del sudeste donde se planta coca y donde se rocía el cultivo de coca desde el aire. Otra vez, el resultado de tales procesos es la dislocación en aumento y la indignación contra el Estado.

El desplazamiento forzado y la “guerra de la droga” han dejado indigentes a familias enteras económica y socialmente, cuyos efectos más severos han recaído sobre las mujeres. Las razones económicas inmediatas tienen que lidiar con problemas obvios de alimentación, seguridad y vivienda; además, estos problemas están acompañados por problemas psicológicos relacionados con la pérdida de estabilidad, problemas de sostenimiento familiar y largos períodos de miedo inexorable por el temor a la pérdida del esposo y/o algún otro miembro de la familia (Galvis, 2000). La reparación de esta problemática demanda programas de reforma agraria que incluyan al género y la redirección de fondos públicos hacia el reforzamiento del envío de servicios sociales por parte del Estado colombiano, como educación, cuidado de la salud y seguros de desempleo.

LA ESTRUCTURA SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS FARC-EP

El monopolio político establecido por la coalición nacional entre los partidos Liberal y Conservador en el período posterior de *La Violencia* ha dejado un legado de represión, violencia y sistemática desconfianza entre gobernantes y gobernados. Es en este contexto que debe ser entendida la lucha por las tierras en Colombia. En esta sección se discute el surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP) y su base social; en la próxima sección se tratará acerca de su estrategia y táctica política.

Las FARC-EP representan una lucha rural y campesina de gran escala, que ha surgido dentro de una amplia lucha por el acceso a las tierras productivas y por una transformación sociopolítica. Fundada en 1964, las

FARC-EP son un movimiento de guerrilla móvil que ha utilizado constantemente tácticas de acción directa, y se ha convertido en el movimiento más persistente y antiimperialista de América Latina y en la más potente de todas las insurgencias del continente (Rochlin, 2003; Veltmeyer y Petras, 2002; Fisher y Ponniah, 2003; Carr y Ellner, 1993; FARC-EP, 1999). Las FARC-EP ocupan casi dos tercios de todos los municipios de Colombia (Leech, 2002) y continúan desarrollando extensivos vínculos en todas las regiones urbanas y rurales del país (Richani, 2002). Lo central del mandato de las FARC-EP es la protección y defensa de los asentamientos del campesinado contra los grandes propietarios y paramilitares. Las fuerzas paramilitares funcionan en connivencia con el gobierno nacional y las fuerzas armadas, muchas de las cuales han sido entrenadas en la Escuela de las Américas en Fuerte Benning, Georgia (renombrado Instituto para la Cooperación de la Seguridad del Hemisferio Occidental).

El antecesor de las FARC-EP fue un importante y progresista movimiento campesino, que vio a los campesinos y a otros colombianos conscientes para organizarse en comunidades a fin de establecer estructuras comunales de cooperación y seguridad (Petras y Zeitlin, 1968). Las comunidades avanzaron y se expandieron a través de toda Colombia a fines de la década del cincuenta y principios de la del sesenta, y establecieron dieciséis comunidades hasta que recibieron una intervención directa militar en 1964 (Petras y Morley, 1990; Osterling, 1989). Desde el comienzo, por lo tanto, las FARC-EP estuvieron organizadas alrededor de una plataforma agraria campesina enfrentada a la opresión política extrema.

En sus comienzos, en 1964, las FARC fueron principalmente un movimiento basado en el campesinado, integrado por agricultores de subsistencia en Marquetalia, una región relativamente subdesarrollada de Colombia (Osterling, 1989). El objetivo de las FARC-EP era “establecer una sociedad estable, no corrupta y basada en el control local, y una nueva propuesta para contrarrestar al gobierno central represivo, extendiendo la región a otras áreas” (Petras y Zeitlin, 1968: 335; ver también Gott, 1970). Sin embargo, desde las cuatro décadas desde su comienzo, las FARC-EP han desarrollado una plataforma compleja que intenta abordar una plétora de temas políticos, sociales y económicos críticos. Esos temas existen como hilos que se han enredado cada vez más en un nudo de conflictos de clase, represión estatal, violencia brutal y extrema desigualdad y pobreza socio-económica. La constitución actual de la organización continúa incluyendo agricultores de subsistencia, pero ha crecido para incluir a campesinos, trabajadores rurales sin tierra desplazados y también a una sección de trabajadores urbanos (FARC-EP 2003b).

Las FARC-EP, como “ejército popular”, necesariamente incluyen hombres y mujeres, en una cada vez mayor igualdad de términos. En tanto la mayoría de la fuerza de guerrilla móvil está compuesta por hombres, las

mujeres juegan un rol sustancial dentro de la insurgencia. En el momento del ataque inicial en Marquetalia, que llevó a la formación de las FARC-EP, entre los cuarenta y ocho guerrilleros había dos mujeres (FARC-EP, 1999, 2000/2001; Richani, 2002). Desde la década del sesenta, las FARC-EP no han dejado de construir la igualdad de género dentro de la organización. Durante la década del setenta, el número de mujeres involucradas en el movimiento llegó a un 20% (Richani, 2002). Se estima que en la década del noventa, el número de mujeres dentro de la organización superó el 30%; ahora está en un 40%, aproximadamente (Roman, 2000; Leech, 2003; FARC-EP, 2001). En comparación, la proporción de mujeres en el gobierno colombiano (Congreso) es de un 12,6% (Córdoba Ruiz, 2002), mientras que el ejército nacional sólo mantiene un contingente de 2% de mujeres (Penhaul, 2001). En la insurgencia, las mujeres juegan un rol clave en los esfuerzos por politizar el movimiento a través de la responsabilidad de la comunicación y la educación. También, junto con los hombres, llevan “las cuentas, son cocineras, obtienen fondos, son especialistas en logística, médicas, o reclutadoras que pueden tener sólo un rol pasivo” (Hudson 2002: 18-19). Podemos concluir, entonces, que mientras las dinámicas de la pobreza y la violencia afectan a las mujeres y a los hombres de diferente manera, mujeres y hombres se unen en las FARC-EP con un espíritu de solidaridad en favor de la defensa de la reforma agraria y de la transformación socio-política, en contra de la hegemonía de las elites y los hombres de negocios nacionales e internacionales.

En las áreas bajo su control, las FARC-EP han estado promoviendo activamente un modelo socio-económico y político diferente. En el ámbito del desarrollo económico y social, la organización ha establecido un arreglo económicamente beneficioso y democrático para reinvertir en las comunidades en las que están involucradas, estableciendo sistemas de créditos agrarios para que los agricultores puedan tener la capacidad de establecer un producto capaz de proveer sustento a la comunidad (Rochlin, 2003). En efecto, mientras las FARC-EP no apoyaban la producción de coca han permitido que los campesinos se beneficiaran financieramente, tanto en los mercados domésticos (a través de precios justos para las mercancías) como en el mercado internacional. En el área de la salud, las FARC-EP (con el apoyo de hospitales y farmacias) han llevado a cabo campañas de vacunación masiva para 20 mil niños y adultos (FARC-EP, 2001). Las FARC-EP han construido caminos e infraestructura para facilitar la entrega de servicios al público y también diseñan una salida para los bienes y productos de la región para la venta y el intercambio.

En el ámbito del gobierno local, las FARC-EP han quitado los modelos de justicia jerárquicos y piramidales y establecieron reuniones organizadas por la comunidad para juzgar a aquellas personas que han sido acusadas de mala conducta. Como Richani (2002: 89) ha mostrado, las

FARC-EP, con la ayuda de las comunidades, han implementado Reglas de Convivencia, que son las “leyes y sanciones” en cuanto a temas como la violencia en el hogar, uso de drogas y destrucción del medio ambiente. En muchas regiones del país, como Nazih Richani ha indicado:

El poder de las guerrillas es ejercido a través de la elección de concejales y alcaldes municipales y del desembolso de fondos públicos. De acuerdo con algunos testimonios, las FARC no imponen candidatos sino que, como en los casos de las elecciones municipales de 1998 en Yondo, Cantagallo y San Pablo (todas en Magdalena Media), se organizaron cabildos donde los candidatos eran elegidos libremente y luego se llevaba a cabo una elección general (2002: 89).

Hoy, más del 93% de todas las “regiones de asentamiento reciente” en Colombia tiene presencia guerrillera, asegurando así su crecimiento continuo (Bergquist et al., 2003: 15). La insurgencia está localizada actualmente en más de seiscientos veintidós municipios de un total de mil setenta y uno (Leech, 2002). Desde 1999, las FARC-EP han tenido presencia en más del 60% del país (Vanden y Prevost, 2002) y siguen expandiéndose en forma constante. Además, durante los últimos años, muchas personas han migrado a las regiones del FARC-EP, con la certeza de que estarán protegidas y serán capaces de expandir y exportar sus cultivos libremente (Wilson, 2003). En solo un año (2000), más de 20 mil personas migraron a las FARC-EP de Villa Nueva Colombia (FARC-EP, 2000/2001).

Militarmente, las FARC-EP están organizadas en una cadena de comandos. El Secretariado del Estado Mayor General Central está compuesto por siete miembros: Manual Marulanda Vélez, Raúl Reyes, Iván Márquez, Jorge Briceño, Timoleón Jiménez, Alfonso Cano e Iván Ríos. El Estado Mayor General Central tiene veinticinco miembros de todo el país organizados en siete bloques: Este, Oeste, Sur, Centro, Medio de Magdalena, Caribe y César (Richani, 2002; FARC-EP, 2001). Dentro de estos bloques hay más de cien frentes, que alcanzan un promedio de trescientos a seiscientos soldados cada uno. En 2002, se estimó que había más de ciento cinco frentes en toda Colombia (Crandall, 2002: 62; Bergquist et al., 2003: 15); más datos recolectados (por el autor) en diciembre de 2003 sugieren que hay posiblemente varias docenas más de frentes, es decir que llegarían a los ciento sesenta y cinco aproximadamente.

El apoyo externo para las FARC-EP (fuera de las fuerzas de combate) se ha hecho bastante amplio. Si bien es difícil referirse a un número exacto, ya que muchos colombianos viven con miedo a que sus comunidades sean blanco u objetivo de paramilitares, algunas cifras estiman que cerca del millón de colombianos (rurales y urbanos) apoyan directamente a las FARC-EP, en tanto otros números indican que son varios millones (Petras y Veltmeyer, 2001; FARC-EP, 2001).

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA LUCHA ARMADA

La lucha por las tierras en Colombia enfrenta y busca abordar problemas políticos, económicos y sociales. Esos problemas son principalmente atribuibles a la marginación socio-político de la población rural, al crecimiento descontrolado de la pobreza rural, a la pérdida de posibilidades de sustento y a los actos de terrorismo sancionados/patrocinados por el Estado contra la ciudadanía rural comprometida (o sospechada de apoyar a) con la lucha armada de las FARC-EP (Leech, 2002; Scott, 2003; FARC-EP, 1999).

Los objetivos emancipatorios de las FARC-EP han nacido siempre de imperativos asociados con el logro de una solución de los problemas sociales y económicos del país (Pearce, 1990). De esta manera, los objetivos de la lucha popular han sido y continúan siendo guiados por la creencia de que una transformación estructural antisistémica de naturaleza revolucionaria es la única manera efectiva de mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría de los ciudadanos colombianos (FARC-EP, 2000). En ese contexto, entonces, el desmantelamiento del poder atrincherado de las estructuras e instituciones que protegen los intereses las elites domésticas es percibido como uno de los elementos, y uno crucial, de la transformación radical demandada por las FARC-EP.

Es más, lo que comenzó principalmente como una lucha por las tierras de base rural y campesina en la década del cincuenta se ha convertido en un movimiento nacional político que posee una visión alternativa de cómo facilitar el logro de objetivos de desarrollo moderno (Ortiz, 2002; FARC-EP 2000; Pearce, 1990; Brittain, 2004). No obstante, debe también reconocerse que a través de la evolución del movimiento, el compromiso de la organización con la reforma agraria ha vacilado. Intrincadamente conectado con los objetivos socio-políticos de las FARC-EP, la reforma agraria genuina es percibida como dependiente de la abolición de la oligarquía colombiana que, durante siglos, dominó la vida política, social y económica del país.

Tres documentos importantes bosquejan las luchas estratégicas de las FARC-EP. Esos documentos son: (a) el Programa Agrario, (b) los Acuerdos Uribe, y (c) la Plataforma por un Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional.

EL PROGRAMA AGRARIO

El Programa Agrario de las FARC-EP fue proclamado el 20 de julio de 1964, en medio de la lucha armada de Marquetalia, y fue subsecuentemente revisado y ampliado durante la Séptima Conferencia Nacional de la Organización, en abril de 1993. Estos programas se han convertido en la “bandera de lucha del movimiento revolucionario y especialmente de las guerrillas revolucionarias” (FARC-EP, 1999: 18). El objetivo general

de este programa es aumentar la calidad de vida material y cultural de todo el campesinado. Los imperativos de lograr de este objetivo incluyen la eliminación del desempleo, del hambre y del analfabetismo. Dentro de esta visión, la liberación del campesinado de las cadenas del sistema de latifundio sigue siendo una meta central, junto con la promoción del desarrollo de la producción agrícola e industrial. Las FARC-EP están llamando principalmente a la confiscación de grandes propiedades para el beneficio de todos los trabajadores (FARC-EP, 1993).

La segunda característica del Programa Agrario es que todos los agricultores, ocupantes, rentistas, aparceros, inquilinos y peones de los grandes latifundios y tierras del Estado han de recibir títulos de propiedad de las tierras que explotan. Además, los sistemas de aparcería, insostenibles y destructivas formas de uso de tierras, y de alquiler (en dinero o especies) han de ser eliminados. Todas las deudas de los campesinos a usureros, especuladores y a instituciones de crédito oficiales y semioficiales deben ser anuladas. Nuevos sistemas de crédito deben ser establecidos por la insurgencia con facilidades de pago, provisión de asistencia técnica, recursos agrícolas como semillas, herramientas, sistemas de equipamiento y riego, todas las cuales ya han sido distribuidas a los campesinos por las FARC-EP (Rochlin, 2003; Richani, 2002). Estos servicios deben ser ofrecidos tanto a campesinos individuales como a cooperativas que puedan surgir durante el proceso de reforma agraria.

El Programa Agrario también requiere provisiones especiales para el establecimiento y el mantenimiento de servicios adecuados de cuidados de la salud y educativos para el campesinado. Los problemas de instalaciones para el cuidado de la salud y el analfabetismo rural son vistos como áreas de prioridad que necesitan mejoramiento. Las FARC-EP también buscan la total erradicación del analfabetismo y la implementación de un sistema de escolarización basado en el mérito y en las necesidades de los niños que trabajan la tierra. Un gran esquema de viviendas para el campesinado también está incluido en el Programa, con el objetivo de asegurar los derechos de toda la gente a un refugio adecuado. Finalmente, las mejoras masivas en los sistemas de comunicación en las áreas rurales también son una exigencia, y esto incluye la provisión de educación técnica a todas las personas, de modo de aumentar los estándares de las áreas rurales y de los pobres y de alcanzar un nivel semejante al de las clases más altas y las regiones urbanas. Actualmente, uno de cada ocho colombianos tiene acceso al teléfono (y uno de cuarenta tiene acceso a la computadora), y este acceso está obviamente concentrado en los estratos más ricos de la sociedad, ubicados en las zonas urbanas más grandes.

Todos los cambios presentados en el programa mencionado han sido discutidos o implementados dentro de los limitados medios y recursos de las FARC-EP. De los ingresos que la organización recauda,

“la mayor parte del dinero se dirige a inversiones en proyectos públicos como escuelas vocacionales, pavimentos de calles, salud pública y protección del medio ambiente” (Richani, 2002: 80). En relación con estas actividades, otra parte de los ingresos es distribuida para la construcción y ampliación de infraestructura (construcción de rutas de transporte modernas, métodos alternativos para el comercio, etcétera).

Respecto de las condiciones y demandas singulares de las comunidades indígenas en las zonas rurales de Colombia, el Programa Agrario especifica explícitamente que algunos grupos serán provistos también con suficientes tierras para el desarrollo. Mientras que las comunidades indígenas gozan de todos los beneficios de la política agraria revolucionaria, el establecimiento de organizaciones indígenas autónomas dentro de estas comunidades será apoyado por las FARC-EP, en un genuino respeto por sus consejos comunales, formas de vida, cultura, lengua y organización interna (FARC-EP, 1999). Con esta política, las FARC-EP apuntan a mejorar su relación con muchas comunidades indígenas dentro de Colombia y comienza un compromiso pacífico y saludable para el reconocimiento cultural que ha sido negado por los movimientos políticos y armados del pasado.

Finalmente, el Programa Agrario requiere que se formen sólidas organizaciones campesinas (sindicatos, comités de usuarios de tierras y vecinos). Es percibido como esencial que la lucha debe representar el frente unido más amplio de todas las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias del país, para llevar a cabo un proceso permanente de transformación contra la oligarquía nacional y sus patrones imperialistas.

LOS ACUERDOS URIBE

Las negociaciones entre las FARC-EP y el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) han expresado el deseo de las FARC-EP de encontrar una solución pacífica y socialmente benéfica para los problemas de Colombia. Durante el segundo año del mandato de Betancur comenzaron las discusiones entre el gobierno y las FARC-EP con este horizonte, y en la primavera de 1984 los dos partidos concluyeron sus conversaciones con los Acuerdos Uribe (FARC-EP, 1999; Dudley, 2004).

Los Acuerdos Uribe representan la estrategia de once puntos para el reforzamiento del proceso de construcción de la paz nacional y la facilitación de un proceso de desarrollo sustentable social y económico, y se basan en una fundación sólida de libertad y justicia para todos los colombianos (Arenas, 1985). Esencialmente, estos acuerdos bosquejan las condiciones que deben estar en su lugar con el fin de asegurar un genuino cese de fuego por parte de *ambos*, tanto de los movimientos guerrilleros como de aquellos grupos (Ejército Nacional y otras organizaciones paramilitares) que se mantienen dentro de la jurisdicción del

Estado colombiano. Las FARC-EP acordaron que un cese del fuego era un medio positivo para comenzar las discusiones entre las dos fuerzas opuestas, bajo el entendimiento de que el gobierno implementaría, por medio de actos legislativos, una serie de reformas políticas, económicas y sociales, y que las FARC-EP, por su parte, tolerarían ese período de tiempo para la implementación de las reformas y para una búsqueda de soluciones políticas permanentes (FARC-EP, 1999). Los acuerdos previeron la creación de un espacio político para el establecimiento de una Comisión de Paz que asegurara la realización de las obligaciones del gobierno bajo los Acuerdos. Estas obligaciones incluyeron la modernización de las instituciones políticas, la rápida implementación de reformas políticas y el establecimiento de la reforma agraria. Como tal, Betancur y el gobierno “reconocieron que la violencia de la guerrilla era el producto de las condiciones sociales reales y entendieron la relación entre esas condiciones y las demandas de los insurgentes” (Meza, 1998: 24). El gobierno también comprendió la necesidad de involucrar a múltiples agencias del Estado en los procesos apuntados hacia la ampliación permanente de servicios para el campesinado, con el fin de mejorar su calidad de vida y la producción normal de alimentos y materias primas para la industria.

El resultado de los Acuerdos Uribe fue lo contrario de los anuncios originales. En noviembre de 1985, comenzó un proceso inverso. Las FARC-EP empezaron a recibir un fuerte apoyo para sus políticas bajo los Acuerdos (Osterling, 1989), ampliaron sus alianzas para incluir sindicalistas, organizadores campesinos y otros colombianos, y decidieron facilitar la formación de la Unión Patriótica (UP) (Dudley, 2004; Aldana, 2002). A su vez, esto amenazó con convertirse en un instrumento viable para la reforma política dentro del país. En 1986, la UP participó en las elecciones en varios niveles del gobierno y eligieron más de trescientos cincuenta concejales municipales, veintitrés diputados, trece intendentes, nueve miembros del parlamento y seis senadores para el Congreso de la República, lo que demostró el potencial de una alianza amplia y efectiva. La UP también participó en las elecciones presidenciales, obteniendo 350 mil votos, algo inédito en la historia de la izquierda en Colombia. En sus primeros siete meses, este joven movimiento político superó en un 300% los esfuerzos de toda la izquierda colombiana y se estableció como el núcleo de una alternativa política al oponerse al monopolio partidario Liberal-Conservador (FARC-EP, 1999; Dudley, 2004).

La oligarquía estaba muy preocupada. En efecto, a pesar de los Acuerdos Uribe, los grandes propietarios mejoraron el proceso de militarización a través del empleo de organizaciones paramilitares (Bergquist et al., 2003). Durante el mismo período, los militares se

preocuparon por la demasiada libertad que les estaba permitiendo el gobierno a la ideología y a las alianzas de las FARC-EP. Fue en este contexto de miedo y desconfianza que los grupos paramilitares se volvieron hacia el “blanco fácil –colombianos que se habían unido a la Unión Patriótica–” (Kirk, 2003: 117). Las “organizaciones paramilitares estaban socavando el proceso de paz de Betancur con la intensificación de su ‘Guerra Sucia’ contra los que se sospechaba que eran izquierdistas, especialmente contra los miembros de la Unión Patriótica” (Leech, 2002: 20). El resultado fue la numerosa cantidad de senadores, diputados, concejales, intendentes y 5 mil de sus militantes asesinados, y el abandono del proceso por la paz (Galvis, 2000; FARC-EP 2000; Aldana, 2002).

Resulta importante destacar que la administración de Reagan, que gobernaba en el momento de estos asesinatos, estaba fuertemente en contra del gobierno de Betancur y de sus métodos de negociación de cese del fuego con las FARC-EP (Scott, 2003). Aunque el gobierno de los Estados Unidos nunca fue identificado como involucrado en los crímenes, más tarde se revelaría que, luego de 1984, la Escuela de las Américas de los Estados Unidos de América, ubicada en el estado de Georgia, había estado entrenando soldados colombianos en operaciones de contrainsurgencia (Weeks y Gunson, 1991), entre los cuales, más de ciento cincuenta estuvieron implicados en abusos a los derechos humanos (Leech, 2002).

LA PLATAFORMA POR UN GOBIERNO DE RECONCILIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

Desde el abandono de los Acuerdos Uribe, las FARC-EP han desarrollado una estrategia amplia con el fin de facilitar el establecimiento de un Estado colombiano dedicado e instituido bajo los principios del pluralismo, la justicia y la democracia. Esta estrategia es conocida como la Plataforma por un Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional (1993) y sigue siendo una dimensión clave de los esfuerzos político-militares de las FARC-EP de hoy. La plataforma entiende que hasta que no haya una solución política para la crisis colombiana en todas sus manifestaciones, la paz, la estabilidad social y la prosperidad económica se mantendrán esquivas.

Específicamente, la plataforma requiere un gobierno de reconciliación nacional con tareas concretas. Primero, las FARC-EP demandan la reorientación del mandato de las Fuerzas Armadas de la Nación en torno al objetivo de asegurar la soberanía nacional y proteger los derechos humanos (FARC-EP, 1999). La eliminación de las organizaciones paramilitares, que operan de una manera hostil para con los objetivos del logro de la paz, es asumida como una precondition importante para el arribo a una solución política. Segundo, la libertad de prensa y el refuerzo de los

procesos de responsabilidad públicos son percibidos como condiciones críticas para la estabilidad socio-política nacional. Tercero, un gobierno de reconciliación y reconstrucción nacional debe implementar reformas que apunten a redistribuir la riqueza nacional de una manera más justa y equitativa. La Plataforma propone, en particular, que el Estado se comprometa a redirigir el 50% del presupuesto nacional a servicios sociales y el 10% hacia investigaciones científicas (FARC-EP, 1999). Evocando discusiones pasadas, las FARC-EP piden al Estado que asegure que todos los ciudadanos tendrán igual acceso a una salud y educación adecuadas.

Finalmente, la Plataforma demanda modernización económica y desarrollo con justicia social. En oposición a las políticas neoliberales que favorecen la privatización de empresas del Estado, la Plataforma le reclama a este último que se convierta en el dueño y administrador principal de sectores estratégicos como el de la energía, las comunicaciones, servicios públicos, calles, puertos y recursos naturales. Además, se propone que el énfasis de la política de desarrollo económico debe estar puesto en el reforzamiento y expansión del mercado doméstico, en el autoabastecimiento de alimentos y en el apoyo activo de la producción industrial en todos los niveles. También se identifican los imperativos asociados con la promoción de la solidaridad económica nacional, la autoadministración y los microemprendimientos. Las FARC-EP presentaron esta agenda hace ya más de una década, pero ninguna de estas medidas fue implementada.

Las FARC-EP han expandido internacionalmente su acción política y han lanzado un diálogo más amplio a través del cual buscan informar a los no colombianos sobre su programa de cambios a realizarse en Colombia. Este diálogo ha abierto un camino amplio y democrático para que las FARC-EP sean criticadas, cuestionadas y respetadas, en contraste con la postura del gobierno de Colombia (del presidente Álvaro Uribe y luego del ministro de Interior, Fernando Londoño), que ha buscado silenciar y excluir a las organizaciones no gubernamentales y a las “interferencias” externas sobre temas como los derechos humanos y el desarrollo político. En el pasado, varios países, entre los que se cuentan Francia, Noruega, Suiza, Canadá y Brasil, han estado en contacto directo con las FARC-EP para negociar y discutir la paz, la seguridad, la inclusión y el comercio. Incluso el Foro Social Mundial (FSM) ha invitado a las FARC-EP como representantes y participantes que recibieron gran atención, aplausos y respeto en los encuentros de 2001 (Nichols, 2001). A pesar de ello, siguiendo el lanzamiento de los Estados Unidos de la “guerra contra el terror” en 2001, el FSM no ha permitido, en el papel, a ningún grupo armado participar abiertamente en los encuentros, sin omitir a las FARC-EP ni a conductores de Estado como Fidel Castro. En realidad, las FARC-EP se han mantenido involucradas, y el FSM ha sido presionado para alentar abiertamente su asistencia (Research Unit for

Political Economy, 2003). No obstante, como la “guerra contra el terror” continúa, tal aliento es difícil de realizar.

Las FARC-EP han sido capaces de realizar más incursiones domésticas, con el apoyo de y el alineamiento militar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro fuerte movimiento de guerrilla nacional (FARC-EP, 2003a). Una vez se dijo que si estos ejércitos guerrilleros se unieran, nunca constituirían una amenaza real para el gobierno (Bushnell, 1993). Sin embargo, en años recientes han organizado e iniciado ataques conjuntos contra las fuerzas estatales y han lidiado con golpes devastadores contra las fuerzas de contrainsurgencia paramilitares/estatales. Esto ha estado acompañado por una convergencia ideológica entre los dos movimientos y por la superación de sus disputas históricas.

CONCLUSIÓN

La insurgencia dentro de Colombia ha mostrado mucho más vigor y fuerza que el Estado en espacios geográficos específicos. En efecto, durante más de cuatro décadas, el mapa político de Colombia ha sido continuamente trazado por la expansión de la insurgencia y la retirada del Estado. Se espera que este proceso continúe en la medida en que el Estado siga imponiendo una agenda imperialista y prolifere la oposición social. Se espera que crezca la influencia de las FARC-EP y que se extienda en las regiones restantes del país.

Bajo estas circunstancias, el Estado tiene dos opciones: o aborda las necesidades de desarrollo urgentes en las áreas de agricultura, educación y salud, como señalan las FARC-EP; o persiste con su política de violencia social, económica, política y cultural directa mediante las fuerzas estatales y paramilitares. Estas fuerzas, como la historia lo ha mostrado, alimentan un círculo vicioso de opresión y resentimiento, y generan más violencia. La variable clave que el Estado consistentemente trató de dejar afuera de la ecuación es la base social de la insurgencia. Las FARC-EP no son sólo una oposición armada contra el Estado, sino una fuerza social tangible con un modelo diferente de desarrollo socio-económico y político.

BIBLIOGRAFÍA

- Agriculture and Agri-Food Canada 2002 *Colombia: Agri-Food Country Profile Statistical Overview*. En <www.ats.agr.ca/latin/e3007.htm>.
- Aldana, Luis Alberto Matta 2002 *Poder Capitalista y Violencia Política en Colombia: Terrorismo de Estado y Genocidio contra la Unión Patriótica* (Bogotá: Ideas y Soluciones Gráficas).
- Arenas, Jacobo 1985 *Cese El Fuego: Una Historia Política de Las FARC* (Bogotá: Editorial La Oveja Negra).

- Banco de la República Colombia 2003a *Foreign Trade: Exports*. En <www.banrep.gov.co/estad/ingles/pg6994.htm#6>.
- Banco de la República Colombia 2003b *Foreign Trade: Imports*. En <www.banrep.gov.co/estad/ingles/pg7994.htm#7>.
- Bergquist, Charles, Penaranda, Ricardo y Sánchez, Gonzalo 2003 *Violence in Colombia 1990–2000: Waging War and Negotiating Peace* (Wilmington: Scholarly Resources).
- Betancourt, Ingrid 2002 *Until Death Do Us Part: My Struggle to Reclaim Colombia* (New York: HarperCollins).
- Bowden, Mark 2001 *Killing Pablo: The Hunt for the World's Greatest Outlaw* (New York: Atlantic Monthly Press).
- Brittain, James J. 2004 "The Revolutionary Armed Forces of Colombia–People's Army: A Marxist Insurgency for Revolution?", M.A. tesis, Acadia University.
- Bushnell, David 1993 *The Making of Modern Colombia: A Nation in Spite of Itself*, (Berkeley, CA: University of California Press).
- Caballero, María Cristina 2004 *A Lefty Takes Bogotá: Mayor Luis Eduardo Garzon Will Complicate Uribe's Agenda*. En <www.msnbc.msn.com/id/3989953/>.
- Carr, Barry y Ellner, Steve 1993 *The Latin American Left: From the Fall of Allende to Perestroika* (London: Westview Press).
- Chaliand, Gerard 1977 *Revolution in the Third World: Myths and Perspectives* (New York: Viking).
- Chasteen, John Charles 2001 *Born in Blood and Fire: A Concise History of Latin America* (New York: W.W. Norton).
- Clawson, Patrick, L. y Rensselaer, W. Lee III 1998 *The Andean Cocaine Industry* (New York: St. Martin's/Griffin).
- Cordoba Ruiz, Piedad 2002 *Women in the Colombian Congress* (Stockholm: International Idea).
- Cortez, Hernán 2002 *Colombia Country Guide*. En <www.oneworld.net>.
- Crandall, Russell 2002 *Driven by Drugs: US Policy toward Colombia* (London: Lynne Rienner).
- Currie, Lauchlin 1966 *Accelerating Development: The Necessity of the Means* (New York: McGraw-Hill).
- Dudley, Steven 2004 *Walking Ghosts: Murder and Guerrilla Politics in Colombia* (London: Routledge).
- Economist Intelligence Unit (EIU) 2003 *Country Report: Colombia*. En <www.economist.com/countries/Colombia/profile.cfm?folder=Profile-Fact>.
- Fals-Borda, Orlando 1976 *Peasant Societies in the Colombian Andes: A Sociological Study of Saucío* (Westport: Greenwood Press).

- FARC-EP 1993 *The Agrarian Programme of the Guerrillas of the FARC-EP* (FARC-EP International Commission).
- FARC-EP 1999 *FARC-EP Historical Outline* (FARC-EP International Commission).
- FARC-EP 2000 *Resistencia*, 24.
- FARC-EP 2000/2001 *Resistencia*, 25.
- FARC-EP 2001 *Resistencia*, 26.
- FARC-EP 2003a *Joint Communiqué of the FARC-EP and the ELN, July 13, 2003*, Secretariat of the Central General Staff of the FARC-EP and the ELN General Command.
- FARC-EP 2003b *Solidarity Communiqué from the FARC-EP, June 22 2003*, Secretariat of the Central General Staff of the FARC-EP.
- Fisher, William F. y Ponniah, Thomas 2003 *Another World is Possible: Popular Alternatives to Globalization at the World Social Forum* (Halifax, NS: Fernwood).
- Galvis, Constanza Ardila 2000 *The Heart of the War in Colombia* (London: Latin American Bureau).
- Gilbert, Alan 1974 *Latin American Development: A Geographical Perspective* (Harmondsworth: Penguin).
- Gott, Richard 1970 *Rural Guerrillas in Latin America* (London: Pelican Latin American Library).
- Hobsbawm, Eric J. 1973 *Revolutionaries: Contemporary Essays* (New York: Pantheon Books).
- Hudson, Rex A. 2002 *Who Becomes a Terrorist and Why: The 1999 Government Report on Profiling Terrorists* (Guilford, CT: Lyons Press).
- Kirk, Robin 2003 *More Terrible than Death: Massacres, Drugs, and America's War in Colombia* (New York: Public Affairs).
- Latin American Working Group, Colombia Steering Committee, Working Group on Displacement (LAWG) 2003 *Colombians Displaced by Violence Need Protection and Assistance* (Washington DC: Latin American Working Group).
- Leech, Garry M. 1999 "Fifty Years of Violence" en *Colombia Journal Online*. En <www.colombiajournal.org/fiftyyearsofviolence.htm#three>.
- Leech, Garry M. 2002 *Killing Peace: Colombia's Conflict and the Failure of US Intervention* (New York: Information Network of the Americas).
- Leech, Garry M. 2003 "Photo Gallery: FARC Guerrillas" en *Colombia Journal Online*. En <www.colombiajournal.org/farcphotos.htm>.
- Lindqvist, Sven 1979 *Land and Power in South America* (Harmondsworth: Penguin).

- Marx, Karl 1991 *Capital: A Critique of Political Economy* (Harmondsworth: Penguin) Vol. 3.
- Meza, Ricardo Vargas 1998 "The FARC, the War and the Crisis of State" en *NACLA Report on the Americas*, 31(5), pp 22-28.
- Molano, Alfredo 2000 "The Evolution of the FARC" en *NACLA Report on the Americas*, 34(2), pp 23-32.
- Mondragón, Héctor 2001 *Towards "Humanitarian Intervention" in Colombia?*. En <www.zmag.org/crisescurevts/colombia/hemon.htm>.
- Nichols, Dick 2001 "Thousands Attend World Social Forum in Brazil" en *LINKS: International Journal for Social Renewal*. En <www.dsp.org.au/links/back/issue18/Nichols.html>.
- Ortiz, Román D. 2002 "Insurgent Strategies in the Post-Cold War: The Case of the Revolutionary Armed Forces of Colombia" en *Studies in Conflict and Terrorism*, 25, pp 127-143.
- Osterling, Jorge P. 1989 *Democracy in Colombia: Clientelist Politics and Guerrilla Warfare* (Oxford: Transaction).
- Parpart, Jane 2000 "Rethinking Participation, Empowerment, and Development from a Gender Perspective" en Freeman, J. (ed.) *Transforming Development: Foreign Aid for a Changing World* (Toronto: University of Toronto Press).
- Pearce, Jenny 1990 *Colombia: Inside the Labyrinth* (London: Latin America Bureau).
- Pearce, Scott 2002 "Fuelling War: The Impact of Canadian Oil Investment on the Conflict in Colombia" en *Centre for Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC)*, Working Paper Series.
- Pearson, Ruth 1992 *Poverty and Development in the 1990s* (Oxford: Oxford University Press).
- Penhaul, Karl 2001 "Colombia's Communist Guerrillas Take On a Feminine Face" en *Global Correspondent*, 1 de enero.
- Petras, James y Morley, Morris 1990 *US Hegemony under Siege: Class, Politics and Development in Latin America* (London: Verso).
- Petras, James y Veltmeyer, Henry 2001 *Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century* (London: Zed Books).
- Petras, James y Veltmeyer, Henry 2003 *System in Crisis: The Dynamics of Free Market Capitalism* (London: Zed Books).
- Petras, James y Zeitlin, Maurice 1968 *Latin America: Reform or Revolution? A Reader*, Greenwich (CT: Fawcett Publications).
- Randall, Stephen J. 1992 *Colombia and the United States: Hegemony and Interdependence* (Athens, GA y London: University of Georgia Press).
- Research Unit for Political Economy 2003 "How and Why the World Social Forum Emerged" en *The Economics and Politics of the*

- World Social Forum*. En <www.rupe-india.org/35/howandwhy.html>.
- Richani, Nazih 2002 *Systems of Violence: The Political Economy of War and Peace in Colombia* (New York: SUNY Press).
- Rochlin, James F. 2003 *Vanguard Revolutionaries in Latin America: Peru, Colombia, México* (Boulder, CO: Lynne Rienner).
- Román, Fernando 2000 "Plan Colombia Means War" en *Buenos Aires Daily*, 2 de octubre.
- Sachs, Carolyn 1996 *Gendered Fields: Rural Women, Agriculture, and Environment* (Boulder, CO: Westview Press).
- Scott, Peter Dale 2003 *Drugs, Oil, and War: The United States in Afghanistan, Colombia and Indochina* (New York: Rowman & Littlefield Publishing).
- United States Embassy in Bogotá 2000 *Statement of Rand Beers Assistant Secretary of State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs before the Subcommittee on Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs of the House Appropriations Committee*, 29 de febrero (Washington: Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs).
- Vanden, Harry E. Y Prevost, Gary 2002 *The Politics of Latin America: The Power Game* (New York: Oxford University Press).
- Veltmeyer, Henry y Petras, James 2002 "The Social Dynamics of Brazil's Rural Landless Workers' Movement: Ten Hypotheses on Successful Leadership" en *Canadian Review of Sociology and Anthropology*, 39(1), pp 79-96.
- Weeks, John y Gunson, Phil 1991 *Panama: Made in the USA* (London: Latin American Bureau).
- Weil, Thomas A., et al. 1970 *Area Handbook for Colombia* (Washington, DC: Foreign Area Studies of the American University).
- Wickham-Crowley, Timothy 1991 *Exploring Revolution: Essays on Latin America Insurgency and Revolutionary Theory* (New York: M.E. Sharpe).
- Wickham-Crowley, Timothy 1992 *Guerrillas & Revolution in Latin America: A Comparative Study of Insurgents and Regimes since 1956* (Princeton, NJ: Princeton University Press).
- Wilson, Scott 2003 "Colombia's Rebel Zone: World Apart" en *Washington Post Foreign Service*, 18 de octubre.
- Wood, Ellen Meiksins 2003 *Empire of Capital* (London: Verso).